

Tierra y democracia. La lucha de los campesinos paraguayos

Fogel, Ramón

Ramón Fogel: Sociólogo paraguayo, doctorado en la Universidad de Kansas. Actualmente, director del Centro de Estudios Rurales de Itapúa (CERI). Docente universitario. Autor de diversos estudios sobre temas agrarios.

La modernización de la estructura agraria en Paraguay y la orientación de los cultivos hacia las demandas del mercado externo, afectaron a distintas capas campesinas, especialmente las más pobres, que no tardaron en reaccionar, sobre todo a partir de la crisis agraria que se precipita en 1982. Minifundistas, productores sin tierras, peones, mujeres y comunidades de base, forman una intrincada red de movimientos sociales que se expresan actualmente en el campo paraguayo, uniendo sus demandas por el suelo, a la lucha - a veces indirecta - contra el sistema político autoritario, por mejores condiciones de vida y por la democracia Su acción se lleva a cabo utilizando formas novedosas, con éxitos parciales, avances y retrocesos, que - poco a poco - están gestando un gran cambio.

Los flujos y reflujos de los movimientos campesinos en Paraguay, y las modalidades que adoptan, se corresponden con las características de la estructura agraria y sus transformaciones. Así, en los últimos años la constitución de nuevos movimientos y organizaciones campesinas, y la reactivación de organizaciones que permanecían en latencia, se dan como respuesta a la severa crisis agraria que se desarrolla a partir de 1982. Esta crisis, a su vez, se estuvo gestando en los años anteriores, concomitantemente con el proceso modernizador, impulsado desde el Estado, interesado en estimular el estilo agroexportador de desarrollo.

En cuanto a la significación de lo agrario, debe tenerse en cuenta que en Paraguay, a diferencia de países vecinos, el campesino tiene igual o más peso que otros actores subalternos, de cara a un proceso de autotransformación de la sociedad, caracterizada por la debilidad de su estructura de clases. En efecto, en Paraguay,

tanto la economía como la estructura social, continúan siendo predominantemente agrarias; más de la mitad de la población vive en áreas rurales y se dedica a tareas agroindustriales o agropecuarias, y la agricultura provee más del 80 por ciento de nuestras exportaciones.

En cuanto a la contribución de la agricultura en la generación del PIB, esta contribuyó con cerca de la tercera parte de la producción total de bienes.

El proceso modernizador

Hasta la década del 60, Paraguay constituía una sociedad agraria, basada en una agricultura atrasada y estancada. La estructura de la tenencia de la tierra se caracterizaba por su marcada concentración; el contraste entre el latifundio y el minifundio dominaba la escena rural. En este contexto, las capas campesinas, insertas en la agricultura de subsistencia, se vinculaban a la economía dineraria insertándose en mercados de trabajo asalariado temporal en Argentina, ante la declinación de los enclaves que explotaban localmente la madera y la yerba mate, mientras la fuerza de trabajo excedente que se generaba en el campo se incorporaba a migraciones permanentes hacia Buenos Aires.

En este contexto socioeconómico, el tipo de movilización campesina de mayor significación histórica fue el definido a partir de las luchas por la tierra, que se desarrollan desde las primeras décadas del siglo. Estas movilizaciones, aisladas entre sí, particularizadas en torno a la reivindicación de la propiedad parcelaria, alimentaron la memoria colectiva del campesinado, y en esa medida apoyaron procesos de constitución de identidades colectivas.

Las formas marginales de lucha social fueron más extendidas que las movilizaciones de tipo instrumental, orientadas a la defensa de intereses propios, para lo cual se establecen alianzas y se busca influir en grupos externos. Los movimientos milenaristas constituyeron una de las formas prepolíticas o arcaicas de acción colectiva más frecuentes. Otra forma marginal de lucha social fue el bandolerismo social. Grupos campesinos, buscando redentores, alimentaron la leyenda de bandoleros invulnerables, capaces de vengar, con su valor personal, los agravios a las capas campesinas.

Estas formas arcaicas o prepolíticas de acción colectiva han sido las históricamente disponibles, en una formación social en la cual los grupos subalternos no tuvieron

canales abiertos para formular sus demandas y participar colectivamente en su prosecución.

Con la superación de la crisis de dominación política, al consolidarse en el control del Estado un grupo con fuerte ascendencia militar, y con importante apoyo externo, se redefine la cuestión agraria, desde mediados de los años 60. Para superar el estancamiento de esa etapa, las políticas públicas estimulan un estilo agroexportador de desarrollo e impulsan la modernización de la estructura productiva en el campo. Las políticas públicas articulan la modernización a las empresas capitalistas grandes, medianas y pequeñas, así como a los enclaves de agricultura farmer.

La especialización productiva que viabiliza el modelo agroexportador impulsó el vuelco de las unidades económicas campesinas a cultivos comerciales, básicamente el algodón, y en menor medida la soya, a expensas de la producción autoconsumida y la destinada al mercado interno. Así, en el caso del algodón, entre los años 1972-1973 y 1982-1983, la superficie cosechada creció más de tres veces.

El Programa Nacional del Algodón apuntala la agroexportación, a tal punto que la contribución al total de las exportaciones de este cultivo pasa del 5 por ciento, en 1972, al 47 por ciento en 1981. Este insólito crecimiento del cultivo del algodón tiene, como se discutirá más adelante, incidencia marcada en la organización productiva de las economías campesinas.

La notable expansión de cultivos comerciales esta también estrechamente asociada a la monetarización de las relaciones en el campo, y la transformación de los hábitos de consumo de las capas campesinas.

Como resultado del apoyo estatal a las modernas empresas, grandes y medianas, de tipo capitalista, la estructura social/rural se polariza. Se constituye como nuevo actor social la burguesía rural, y se ensanchan las capas de empresarios familiares tipo farmer, ligadas a la inmigración europea, japonesa y brasileña¹.

El sector moderno de la estructura agraria estaría conformado por unas 18.000 unidades económicas operadas por empresarios familiares tipo farmer, asentados en los enclaves ligados a colonos alemanes, japoneses y brasileños, y por unas 300

¹Véase Rivarola, Domingo (comp): Estado, Campesinos y Modernización Agrícola, CPES, Asunción, 1984.

empresas medianas y grandes - y pequeñas propiamente capitalistas. El apoyo del Estado a estas unidades productivas se ha expresado de diverso modo; en términos económicos, a partir de 1982 fueron notables los subsidios otorgados por la vía del cambio preferencial.

Del total de unidades agropecuarias paraguayas, por lo menos el 45 por ciento corresponde a minifundios de 5 hectáreas, y menos. Gran parte de las capas minifundistas incluirían campesinos sin tierra, debido al acceso precario a parcelas divididas sucesivamente, hasta su "pulverización".

La fase modernizadora coincidió con una notable expansión de la frontera agrícola, a través de la colonización oficial, a tal punto que entre 1970 y 1982 fueron reasentadas 41.841 familias campesinas. Esta relocalización frecuentemente ha sido espontánea, y en todos los casos respondió a un modelo cuadrangular, a lo largo de grandes "calles", en un esquema que dispersa físicamente a la población y la atomiza socialmente. Parte importante de estas tierras públicas fueron asignadas a agentes ligados al aparato estatal.

Menos empleos

En cuanto al empleo agropecuario, el proceso de modernización tuvo diversa incidencia. Según relevamientos censales, la PEA descendió del 58 por ciento en 1972 al 52,7 por ciento en 1982, y la PEA agropecuaria descendió por debajo del 50 por ciento; sin embargo, considerando la época de mayor demanda de fuerza de trabajo, aún en 1982 la PEA agropecuaria habría sido ligeramente mayor al 50 por ciento. Posteriormente, con la finalización de las obras conexas a la represa de Itaipú, la población activa ligada a actividades agropecuarias habría aumentado, teniendo en cuenta la escasa demanda de fuerza de trabajo por parte del débil sector industrial paraguayo.

En 1981, la importancia relativa de las categorías de ocupación respondía a la siguiente distribución:

Categoría Ocupacional	Porcentaje
Empleador	1,6
Productores y trabajadores independientes	38,6
Trabajadores familiares no remunerados	46,6
Asalariados	13,3

El crecimiento económico-histórico excepcional que se dio en el decenio 1972/1982 comportó la expansión del empleo a una tasa del 3,4 por ciento anual, pero ese crecimiento fue reducido en la rama agropecuaria, a pesar de la expansión de los cultivos comerciales. De estos datos se deriva que la modernización libero fuerza de trabajo. La moderna empresa agrícola, grande y mediana, controla grandes extensiones de tierra y crea pocas fuentes de trabajo.

En efecto, en 1981 las explotaciones de 500 hectáreas y más ocupaban menos de 8 mil asalariados permanentes, mientras en ese mismo año las explotaciones de 20 hectáreas y menos ocupaban poco más de 20 mil asalariados de esa categoría.

En cuanto a la esfera cultural, la modernización desarticuló la identidad social de las capas campesinas; los vínculos comunitarios se debilitaron o desaparecieron en gran parte de las colectividades rurales.

Durante el proceso de modernización de la estructura productiva, diversos factores desmovilizaron o inmovilizaron a las capas campesinas. Uno de los más importantes fue la represión sistemática, articulada desde el Estado. En esta fase, sin embargo, se dio la experiencia organizativa más extendida de las capas campesinas: la de las Ligas Agrarias, brutalmente aniquiladas, ya en 1974².

El proceso de modernización de la estructura productiva, tal como se dio en Paraguay, permitió un crecimiento insólito, pero que no podía permanecer, ya que el mismo portaba las semillas de su propia degradación. En efecto, son los propios rasgos del estilo agroexportador de desarrollo los que precipitan la crisis agraria, que se manifiesta desde principios de la década de los 80. El estancamiento productivo se refleja en la disminución del PIB, que en 1982 llega al - 2 por ciento - en relación al año anterior - y en 1983 decrece en 3,7 por ciento. En ese último año la desocupación llegaba al 15 por ciento.

La vulnerabilidad del modelo de desarrollo volcado al exterior facilitó la proyección interna de los efectos de la crisis de la economía internacional. La marcada caída de los precios de las materias primas en el mercado mundial comportó serios problemas, tanto a nivel macroeconómico como para las familias campesinas; mientras el precio real del algodón - en el mercado internacional tuvo en 1986, en relación a 1980, una caída del 43 por ciento, el precio de la soya cayó en un 39 por ciento en el mismo año, tomando siempre como base 1980.

²Acerca de las Ligas Agrarias de Misiones, véase Fogel, Ramón: Movimientos Campesinos en el Paraguay, CPES, Asunción, 1986.

En la caída sostenida del ingreso campesino pesó no sólo la baja de los precios en el mercado internacional; también el Estado se apropia de una proporción creciente del ingreso campesino, a través de la diferencia cambiaria aplicada a la exportación del algodón y de la soya. Así, a principios de 1986, el Estado se apropiaba de aproximadamente 180.000 (guaraníes) de cada familia que producía 3.000 kilos de algodón en rama.

Por otra parte, el estilo procapitalista de reforma agraria, que implica la venta de grandes extensiones, a precios subsidiados, a empresas transnacionales, así como la asignación prebendaria de tierras en grandes fracciones, agota la colonización programada desde el Estado, marginando del sistema productivo a miles de campesinos sin tierra, y limitando la reproducción del modelo agro-exportador. Este necesita la habilitación de nuevas tierras que generan más producción exportable, especialmente en períodos de caída de precios en el mercado internacional.

La desaceleración de la colonización inducida se aprecia ya en el trienio 1979/1981, con una cantidad media de 2.577 lotes asignados, parte de los cuales correspondían a ocupaciones espontáneas.

La ya referida caída del ingreso campesino también se proyectó en el salario real, percibido por los campesinos semi-asalariados y los asalariados permanentes. En efecto, los jornales agrícolas cayeron un 19 por ciento en 1984, en relación a los vigentes en 1970.

Diversas fueron las formas de reacción campesina, ante el agotamiento de la colonización oficial, el aumento de la desocupación y la caída del ingreso real. Una respuesta, que se dio en algunas regiones, consistió en una reestructuración productiva, que representó una suerte de recampesinización, con el retorno a los cultivos de autoconsumo, y la disminución de los cultivos de renta.

La reacción se tornó más visible en las movilizaciones en apoyo a demandas planteadas al Estado y a otros sectores de la sociedad civil. El potencial transformador de las capas campesinas se reflejó en las movilizaciones entre 1984 y 1986; en este período fueron los campesinos, entre los grupos subalternos, los que protagonizaron las acciones colectivas más importantes.

Los conflictos sociales en el campo se expresaron básicamente a través de la invasión de tierras libres, de tal modo que entre 1983 y 1986 por lo menos 15 mil

familias ocuparon fracciones no explotadas. Sólo entre enero de 1983 y agosto de 1984 las crónicas periodísticas refieren más de 30 invasiones, que movilizaron, aproximadamente, a 7.000 familias campesinas³.

Estas movilizaciones, focalizadas en la reivindicación de la propiedad parcelaria, aisladas entre sí, no constituyeron la única práctica colectiva ante la crisis. Surgen, además, movimientos con una orientación sociopolítica definida, y se constituyen organizaciones con una orientación puramente comunitaria. Rasgos comunes a la diversidad de experiencias consistieron, como se verá, en su naturaleza fragmentaria y embrionaria.

Invasiones y desalojos

Las invasiones de tierras libres, que constituyeron la principal respuesta campesina a la crisis, se diferencian de las viejas formas de la lucha por la tierra, por el contexto en el cual se desarrollan, por la mayor intensidad del conflicto implicado y por su carácter masivo. Las acusaciones a los invasores como "comunistas y subversivos", y la calificación de las ocupaciones como hechos policiales, o judiciales y no como problema social, es el mecanismo que legitima la represión y las acciones orientadas al desalojo.

En los desalojos intervienen efectivos policiales y miembros del ejército, e incorporan como nueva forma de intervención el cerco represivo, que convierte la fracción ocupada en terreno sitiado, sin posibilidades de desplazamiento para los ocupantes; solamente en 1986, en el departamento de Alto Paraná, se registraron ocho desalojos violentos.

Si bien las invasiones se vuelven más intensas en 1983, las mismas continuaron durante los años siguientes, a tal punto que de las informaciones periodísticas se desprende que durante 1986 sólo en tres departamentos - Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa - se movilizaron 3.300 familias, en 17 ocupaciones.

Si bien la mayoría de estos movimientos de ocupantes no tienen un proyecto de transformación de la sociedad, y desde el punto de vista de su articulación con otros movimientos, se caracterizan por su carácter fragmentario, y muy localizado, los mismos logran una notable eficacia instrumental, al obtener el acceso a la propiedad parcelaria.

³Véase Zarza, Olga: Cronología campesina: los conflictos en torno a la tierra en 1985-1986 (mimeo), CERI, Asunción, 1986.

Por otra parte, estos movimientos incorporan una orientación sociopolítica, en la medida que permiten la constitución de identidades colectivas y generan formas de democracia en la sociedad, con participación intensa, en micro espacios, en la solución de problemas de la vida cotidiana.

En relación al surgimiento de nuevas formas de lucha campesina, puede afirmarse que la crisis ensanchó los espacios de participación, y le dio nuevo alcance, al reforzar la espontaneidad. Lo espontáneo en estas ocupaciones implica que la decisión de efectuar la ocupación, y sus modalidades, y la estrategia de defensa posterior, corren por cuenta exclusiva de los adherentes. Los agentes externos normalmente intervienen sólo para la legitimación de la ocupación.

Si bien la espontaneidad facilita la participación en micro espacios, la misma también acorta el ámbito de esa participación, en tanto la acción colectiva espontánea se opone a formas institucionalizadas de autogestión, y más aún, a acciones centralmente dirigidas. Ciertamente, la acción espontánea permite la intervención de capas campesinas en las políticas de asignación de tierra, pero resulta insuficiente para influir en otras políticas agrarias, en las cuales intervienen fuerzas desplegadas a nivel nacional.

En cuanto al proceso de constitución de identidades colectivas, los campesinos movilizados se definen a sí mismos a partir de su sentido de privación. No se definen por compartir un proyecto de transformación, sino a partir de la carencia común de tierra. En efecto, los ocupantes se definen a sí mismos no como clase, sino como los paraguayos pobres que no tienen tierra, que para ganar el sustento pueden legítimamente ocupar tierras libres. Con esta postura los campesinos movilizados niegan el rol que les asignan los grupos dominantes y se representan el orden social como resultado de las luchas sociales.

La formación de la identidad propia comporta también la definición del antagonista, y los campesinos lo hacen incorporando la dimensión nacional. Los líderes de las ocupaciones señalan insistentemente a las grandes empresas ligadas al capital internacional y transnacional como el principal antagonista, en la medida que concentran las mejores tierras. Se trata de un rechazo de la dominación extranjera, aunque el mismo esté referido al monopolio local de la tierra.

En estas acciones colectivas los campesinos impugnan la concentración de la propiedad, y el control de los mejores suelos por parte de extranjeros.

Politización de las demandas

En el caso de gran parte de las invasiones de tierras libres, las movilizaciones, tal como lo señalamos, permanecen aisladas entre si. Se trata de movimientos fragmentados, localizados y particularizados en torno al acceso a la tierra.

En los últimos años, sin embargo, ante el crecimiento de la represión de las ocupaciones, los movimientos tienden a politizarse; las reivindicaciones planteadas adquieren un carácter multifacético, y las demandas pasan a ser formuladas en el escenario nacional.

Las nuevas formas de expresión de las demandas campesinas, estuvieron dadas por las acciones desarrolladas por los ocupantes de Tavapy II, la Asamblea Permanente de Campesinos sin Tierra, y la Coordinación de Mujeres Campesinas, organización conexas, que ciertamente constituye uno de los nuevos actores sociales. Estos y otros nuevos movimientos y organizaciones suman a sus demandas de tipo económico-corporativo, otras orientadas a la transformación de la sociedad. Los mismos integran diversas demandas y plantean la lucha social simultáneamente en diversos frentes (por la tierra; condiciones de comercialización; derecho de asociación, etc.).

Este carácter múltiple de las reivindicaciones planteadas por organizaciones y movimientos campesinos, se corresponde con la forma de inserción de los cultivadores en la estructura productiva, como productores independientes y asalariados temporales, y con frecuencia también como campesino sin tierra.

En los últimos años se va notando, especialmente en las nuevas organizaciones y movimientos, una mayor politización de las demandas. Crecientemente se rechaza la represión, el contrabando, y otras formas de corrupción, y en esa medida se impugna la estructura de poder. En la visión de los grupos movilizados, los problemas de tipo económico no podrán ser resueltos en la actual estructura de poder.

El caso más notable de los movimientos de ocupantes es el de Tavapy II. Los campesinos movilizados en esta ocupación lograron la expropiación de la fracción ocupada, luego de meses de cerco militar-policial.

La expropiación, que siguió a sistemáticos esfuerzos por expulsar a los ocupantes refleja, por una parte, la fuerza que van cobrando los diversos sectores de la

sociedad, solidarizados con los ocupantes y, por otra, el conflicto interno al partido de gobierno, y más específicamente, la decisión de uno de los grupos, de debilitar al otro, arrancando a uno de sus líderes la bandera del coloradismo populista.

Los ocupantes de Tavapy II - 330 familias en la fase final - llevaron el debate a diversos escenarios. Primero ocuparon la Junta de (Gobierno del Partido Oficialista, y luego plantearon sus demandas ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Cámara de Diputados. Los mismos obtuvieron, en el proceso de rechazo del desalojo, la solidaridad de diversos sectores (partidos, iglesias, estudiantes, organizaciones populares).

En cuanto a la solidaridad de los partidos políticos de oposición, debe tenerse en cuenta que aún cuando los mismos, en lo fundamental, limitan sus demandas de políticas alternativas al sistema político y a la democratización del Estado, comenzaron a preocuparse más seriamente por el problema de la tierra, a partir de la represión sangrienta de la ocupación de Juan E'Oleary (Barrero 6) en junio de 1986, y acompañaron en los primeros meses de 1987 las luchas de los ocupantes de Tavapy II, reclamando la expropiación de la fracción ocupada.

A pesar de la resonancia nacional del caso, el Consejo Comunitario de Tavapy II permanece al margen de las federaciones existentes, y los adherentes del movimiento no sólo rechazan la acción colectiva centralmente dirigida, sino que también se niegan a institucionalizar las formas de participación, ya que al crearse cargos dentro de la organización se constituirían poderes formales y los dirigentes, que tendrían cierta permanencia, podrían abusar de sus poderes.

En el Consejo Comunitario, en un tipo de democracia directa, las decisiones se toman en reuniones generales. El Consejo propiamente sólo cuenta con un secretario y un tesorero.

En cuanto a la evolución del asentamiento, Tavapy II sigue las pautas de otras ocupaciones: luego de regularizada la ocupación se inicia el proceso de autodescomposición del movimiento, y concomitantemente la desmovilización. En efecto, desde el mes de mayo de 1987, se constituye en la colonia un capítulo del partido de gobierno, con pretensión de regir la vida de la colonia; el poder local es reemplazado nuevamente por el poder de agentes del orden autoritario, que despliega sus fuerzas en el escenario nacional, y no sólo en micro espacios.

La APCST

La Asamblea Permanente de Campesinos sin Tierra (APCST) nuclea a cultivadores que reaccionan ante un proceso de marginación y ante la crisis agraria.

Los delegados de bases locales o compañías, de la organización, se reúnen periódicamente para apoyar a la Comisión Vecinal, que articulara la frustrada ocupación de Ysoy, y para estudiar las formas de apoyar a otros núcleos campesinos con necesidad de acceso a la tierra. Como resultado de sus gestiones y de sucesivas movilizaciones fueron asentadas ya unas 120 familias en Limoy, hacia septiembre de 1986, mientras un segundo grupo, alojado actualmente en carpas, en el oratorio de San Lorenzo, en Caaguazú, espera ser trasladado a sus tierras. El primer grupo obtuvo su asentamiento luego de ocupar, durante algunas semanas, el local del IBR, en Caaguazú. Se trata, pues, de nuevas formas de movilización.

La organización del grupo asentado en Limoy está articulada por la Comisión Vecinal, que representa a las 123 familias del lugar. La unidad menor de la organización está constituida por grupos de minga, integrados por 10 familias.

La intensa vida comunitaria, en este caso, no impide la movilización hacia afuera, de cara a otras organizaciones de la sociedad civil, y de reparticiones del Estado. La orientación del grupo, que mientras recupera relaciones comunitarias, formula demandas a otros actores sociales y políticos, relativas a los intereses de la colectividad, se proyecta en el acceso a la tierra y en la solución efectiva de problemas de la vida diaria de los colonos (salud, educación, producción, etc.).

La Asamblea se apoya en principios constitucionales que consagran la reforma agraria, y garantizan a todos los habitantes los derechos de peticionar a las autoridades, de asociarse con fines lícitos, y de reunirse pacíficamente.

Las demandas de este movimiento comprenden además del acceso a la tierra, el cese de la persecución a los campesinos y el reconocimiento del derecho de organización y una reforma agraria efectiva. El movimiento impugna la institucionalidad política vigente, básicamente el sistema tradicional de partidos políticos.

Al formular estas demandas, las capas campesinas movilizadas en torno a la Asamblea aparecen como portadoras de un proyecto alternativo de orden social.

En la medida en que las mismas manifiestan capacidad de acción autónoma y de autorrepresentación, constituyen actores sociales.

Los líderes de la Asamblea enfatizan el respeto a las leyes establecidas, así como la autonomía del movimiento respecto a partidos, iglesias, y otras organizaciones externas.

La capacidad de convocatoria del movimiento se manifestó en la primera concentración, que reunió en Caaguazú, el 14 de julio de 1985, a aproximadamente 5.000 campesinos, retomando la Asamblea, diez años después, una forma de movilización que fuera utilizada por las Ligas Agrarias, las organizaciones más notables por su extensión en toda la historia social paraguaya.

Tanto por las demandas planteadas como por la forma de movilización utilizada, la Asamblea constituye un punto saliente en el proceso de luchas campesinas y mantiene continuidad con experiencias truncadas hacia 1974.

Mujeres campesinas y comunidades

El otro hecho saliente, ya en 1985, es el constituido por la presencia de la mujer paraguaya en las luchas campesinas. La Coordinación de Mujeres Campesinas (CMC) se constituye en aquel año, buscando organizar a todas las mujeres campesinas del país. Cuatro meses luego de la masiva concentración de los adherentes de la Asamblea de Campesinos sin Tierras, las esposas, madres y hermanas de estos se movilizan en la primera gran concentración de mujeres conocida en el país, para apoyar las demandas planteadas por la Asamblea y denunciar la sobreexplotación y discriminación a que son objeto, en tanto mujeres.

En la concentración de aproximadamente un millar de mujeres, realizada en Caaguazú, el 17 de noviembre de 1985, se fundamentaba la demanda de tierra, ligando el ámbito de la producción al de la reproducción, y se planteaban reivindicaciones que no surgen de las contradicciones de clase. A las demandas originadas en la condición de campesinos se sumaban otras, que se particularizan a partir del sexo.

La denuncia de la doble opresión de la mujer campesina comporta, en la visión de las adherentes al movimiento, la necesidad de organizaciones femeninas autónomas para canalizar sus demandas. Otros de los reclamos de las mujeres campesinas es el referido al derecho a participar en la defensa de sus intereses en el

plano del consumo (alimentación, salud, educación). Tanto la CMC como la APCST están afiliadas al Movimiento Campesino Paraguayo (MCP).

Entre las formas de movilización ya caracterizadas y los movimientos campesinos de orientación básicamente comunitaria, han surgido - como parte de un proceso de reactivación social - diversas organizaciones regionales, muchas de ellas nucleadas en cuatro organizaciones que buscan una cobertura nacional. Una de estas organizaciones es la Coordinación Nacional de Pequeños Agricultores (CONAPA), que aun cuando utilice limitadamente la movilización abierta, expresa una lógica de oposición y resistencia al sistema de dominación; incluso, en las discusiones del Diálogo Nacional propiciado por la Iglesia Católica, la CONAPA aparecía comprometida con una lógica transformadora, al plantear - por lo menos en el nivel del discurso - los lineamientos básicos de un orden agrario alternativo.

La defensa comunitaria ante la pobreza es otra respuesta campesina a la crisis, y en diversas regiones se observa el regreso a antiguas prácticas de cooperación y de solidaridad vecinal. La misma Iglesia, haciéndose parte del proceso de reactivación de la sociedad campesina, intensifica sus esfuerzos por promover comunidades cristianas de base. Un informe reciente menciona la existencia de 1.170 comunidades eclesiales en los departamentos de Concepción, San Pedro, Caazapá y Misiones. Estas asociaciones comunitarias, que cubren las necesidades ligadas a la promoción de la fe y las orientadas a la promoción humana, mejoran las estrategias de sobrevivencia de las familias campesinas, y expresan formas de protesta social, ante la inexistencia de canales políticos.

Al examinar el potencial transformador de las organizaciones y movimientos campesinos desarrollados últimamente en Paraguay, se puede concluir que estamos en presencia de un proceso contradictorio, con diferencias cualitativas marcadas entre sus componentes, con insuficiencias y gérmenes de formas superiores de acción colectiva.

A las formas habituales de plantear demandas, se incorporan otras nuevas, como movilizaciones, ocupación de espacios públicos con marchas, concentraciones y manifestaciones. A la orientación básicamente económico-corporativa, se suma otra que incluye ya los rudimentos de un proyecto de transformación societal. Sin embargo, aun los movimientos definidos a partir de esta orientación sociopolítica se caracterizan por su dispersión y fragmentación, y por la tendencia a la desmovilización.

Estas insuficiencias se corresponden con condicionamientos adversos que operan, tanto en la esfera socioeconómica como en la política, y en la cultural.

Entre los condicionamientos socioeconómicos se destaca la atomización social creciente dentro de la población rural, impulsada tanto por el tipo de colonización oficial como por el proceso de modernización que debilitó los vínculos comunales. La marcada debilidad - de cara al Estado - de la estructura de clases sociales en Paraguay es otro obstáculo significativo, que dificulta a sectores de nuestra sociedad convertirse en actores sociales.

Entre los condicionamientos políticos resalta la negación sistemática de legitimidad a los esfuerzos campesinos por autorepresentarse y formular sus demandas; la frecuente represión a sus organizaciones, y la marcada debilidad del sistema de partidos políticos.

En la esfera cultural, el mayor obstáculo está dado por la cultura política autoritaria.

No todo es negativo, sin embargo, en el horizonte de las organizaciones y movimientos campesinos, que van perdiendo sus matices arcaicos o prepolíticos, ya que aun los grupos con orientación económico-corporativa están generando formas de participación y de solidaridad ligadas a problemas cotidianos. Más aún, hasta las organizaciones con una visión puramente comunitaria, como las comunidades cristianas de base, van reconstruyendo identidades sociales, con su orientación simbólico-expresiva, que parece agotarse en la afirmación de la existencia colectiva.

En otros casos, los grupos campesinos, al reconstruir su identidad, recuperan su sentido de protagonistas, y en esa medida su potencial transformador. Este potencial puede actualizarse, cuando las condiciones políticas permiten la incorporación plena de los grupos campesinos en el sistema político, y la representación de sus intereses en la esfera del Estado.

Por otra parte, la fragmentación actual de organizaciones y movimientos se podrá superar, en la medida que se perfilen elementos unificadores, ligados a significantes convergentes. Mientras tanto, la escena social seguirá dominada por los conflictos en torno a la tierra, así como la escena política campesina, reducida a microespacios, seguirá marcada por las luchas por la democracia.

Referencias

- *Arditi, Benjamin; Rodríguez, J. C., EL LECTOR. - Asunción, Paraguay. 1987; La Sociedad a pesar del Estado.
- *Fogel, Ramón, POLITICAS Y DEMANDAS DE POLITICAS AGRARIAS EN EL PARAGUAY. 1980 A 1986. - CERI. 1987; Rivarola, Domingo -- Movimientos Campesinos y Transición Democrática en el Paraguay.
- *Fogel, Ramón, MOVIMIENTOS CAMPESINOS EN EL PARAGUAY. - Asunción, Paraguay, CPES. 1986; Entre la Protesta y la Lucha Urbana.
- *Galeano, Luis, REVISTA PARAGUAYA DE SOCIOLOGIA. 67 - 1986;
- *Rivarola, Domingo, LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL PARAGUAY. - Asunción, Paraguay, CPES. 1987;
- *Zarza, Olga, ESTADO, CAMPESINOS Y MODERNIZACION AGRICOLA. - Asunción, Paraguay, CPES. 1984;
- *Zarza, Olga, CRONOLOGIA CAMPESINA: LOS CONFLICTOS EN TORNO A LA TIERRA. - CERI. 1986;
- EL ACCESO A LA TIERRA. UTOPIA DEMOCRATIZANTE DEL MOVIMIENTO CAMPESINO. - CERI. 1986;